

La Comunidad debe exigir inversión en infraestructuras al próximo Gobierno

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La crisis económica y los sucesivos planes de consolidación fiscal impuestos por la UE (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; los Programas de Estabilidad impuestos al Reino de España, hasta el 2018) ha supuesto una pérdida de inversión de 41.000 millones de euros en los últimos cinco ejercicios. Pasando de 62.000 millones de euros de inversión en 2009 (5,1% del PIB) a 21.130 en 2014 (2% del PIB).

La Administración central ha hecho caer los recortes en más de un 65% por 100 sobre la inversión, en lugar de recortar el gasto corriente, reducir la estructura de la Administración –en algunas áreas y materias hasta cuadruplicada– y acabar de una vez con las empresas y entes públicos, agencias, observatorios y fundaciones ineficaces... El Gobierno aun teniendo mayoría absoluta no ha querido acometer este reto.

Ello ha supuesto que la asignación a infraestructuras, a nivel nacional, haya disminuido un 58,33% (23.652 millones de euros en 2010 a 9.855 en 2014). Solamente en la X Legislatura, la de Rajoy, hemos recibido en la Comunidad Valenciana 1.780 millones de euros menos que la media española. En el periodo 2000-2015 el déficit alcanza 6.970 millones.

Esta política restrictiva contrasta con la inversión de nuestros países vecinos. Hemos hecho caso omiso al efecto sobre el empleo y retorno fiscal que genera una inversión en infraestructuras. Un millón de euros de inversión en infraestructuras genera 14,5 empleos y tiene un retorno fiscal del 49%. Además, como inductora de la actividad económica y efecto arrastre, cada euro en infraestructuras genera 1,92

euros de actividad en el conjunto de la economía (automoción 1,83; agricultura 1,76, etc.).

Esta política errónea del Gobierno destruyó entre 2008 y 2014 hasta 1.367.000 empleos en edificación (burbuja crediticia-bancaria-inmobiliaria, con culpabilidad 'in vigilando' del Banco de España) y 369.000 empleos en obra civil, estos directamente achacables a la Administración.

Mientras en España, la inversión Pública ajustada a la población y superficie, según ratio de Eurostat, hemos pasado de 1.700 euros por kilómetro cuadrado y millón de habitantes (en el ciclo expansivo 1995-2009) a 1.400 euros (ciclo recesivo 2010-2014), que supone una reducción del 21%. En el Reino Unido, en ese periodo han aumentado un 43%, en Alemania un 17% y en Francia un 4%. Países estos que optan acertadamente por una inversión sostenida y planificada a largo plazo y no pendular.

Estamos en un momento crucial. Ante un mercado global y una disciplina presupuestaria comprometida con la UE, es preciso un Plan de Actuación Pública que evite retrocesos como nación y como región, a través de fórmulas que compatibilicen el ajuste del gasto público con las necesarias inversiones, a través de financiación privada.

No olvidemos que la Comunidad Valenciana, con un 10,83% de población, mantiene todavía un PIB de tan sólo el 9,54% del nacional, y nuestro nivel de riqueza (20.073 euros por habitante) es aun el 88,12% de la media nacional (22.780 euros por habitante).

Para estimular la economía, crear puestos de trabajo y abordar una serie de carencias en infraestructuras y equipamientos sociales para los ciudadanos hay que actuar en ocho áreas: transportes, agua, energía, medio ambiente, infraestructuras sociales, urbanismo y mantenimiento. Ello supone que es preciso invertir de forma sostenida durante los próximos diez años entre 1,7 (a nivel nacional) y 2,4 veces en la Comunidad Valenciana el actual nivel de inversiones.

- Transporte: logística, accesibilidad a grandes ciudades, aparcamientos disuasorios, ferrocarriles de cercanías con un grado de utilización más elevado que la alta velocidad, redes secundarias, transporte ferroviario de mercancías –con cuota del 4%, cuando Francia tiene un 15% y Alemania un 28%–, plataformas logísticas.

- Agua: nuestro estrés hídrico es el mayor de Europa. Un 72% de nuestra superficie tiene un consumo

de agua que supera el 40% del agua total disponible. Mejorar el abastecimiento, actualmente con pérdidas del 26%. Regulación de recursos hídricos...

- Energía: mejorar la eficiencia energética en edificios. Impulsar las energías renovables –ahora estamos en un 15% y el objetivo de la UE nos marca un 27% para el 2030. Mejorar nuestras conexiones con Europa (somos una isla), nuestra interconectividad está en el 5% y hemos de llegar al 10% en 2020. En gas tenemos una capacidad de

regasificación de 1.920 GWh. y sólo utilizamos el 25%. Hay que interconexionarnos con Europa).

- Urbanismo: desarrollar la movilidad, rehabilitación de edificios, regeneración urbana...

- Infraestructuras sociales: en sanidad, hospitales, centros de día y residencias. Tenemos 3,1 camas por cada mil habitantes. Alemania tiene 8,2 camas y Francia 6,4 camas. En infraestructuras educativas invertimos 15 euros por habitante y año, mientras Alemania 25, Francia 47 y la media europea es de 25.

- Mantenimiento de infraestructuras: Francia y Alemania invierten alrededor de 125.000 euros por kilómetro y año en mantenimiento de carreteras. España, 60.000 euros.

Desde la Cámara de Contratistas exigimos a los partidos y a los diputados y senadores que salgan elegidos, representando a la Comunidad Valenciana y a nuestros intereses, que reivindiquen ante el Gobierno de la Nación salido de las urnas próximamente, las infraestructuras sostenibles que la Comunidad necesita y que debemos consensuar entre la Generalitat –sus consellerías implicadas–, las organizaciones empresariales y las universidades para el decenio 2016-2025.



:: JESÚS SIGNES